JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Bucaramanga, veinte de octubre de dos mil veintiuno

En el estado actual de las diligencias resulta evidente que se acredita con certeza la existencia de un hecho superado conforme pasa a explicitarse.

La demanda se admitió inicialmente por auto del 12 de enero de 2021 por parte del juzgado promiscuo del circuito de La Virginia – Risaralda, en donde posteriormente se declaró nulidad de lo actuado y se enviaron aquí las diligencias el 2 de junio de 2021, como se observa en el acta de reparto del archivo número 2.

Precisado lo anterior, con certeza se sabe que la *causa* del presente asunto es por la ausencia de un guía intérprete o profesional intérprete, así como la falta de señales visuales y auditivas para las personas en condición de discapacidad que acuden a las instalaciones del banco Davivienda que funciona en la *carrera 27 # 20 – 80 de Bucaramanga*.

Conforme se afirma en la contestación ofrecida por el Banco Davivienda obrante en los archivos 33 al 44, la que por lo demás fue enviada al demandante como lo dispone el artículo 9 del decreto 806/20 quien durante el traslado guardó silencio, se acredita con certeza que la oficina de la carrera 27 # 20 – 80 de Bucaramanga *no* presta servicios bancarios desde el mes de junio de 2019 y los cajeros electrónicos fueron retirados el 18 de junio de 2021, aspecto que fue ordenado por la junta directiva de Davivienda en acta del 25 de junio de 2019 obrante en el archivo 36.

Si bien es cierto que el municipio de Bucaramanga en el informe de los archivos 45 y 46 afirma que la sede objeto del presente asunto fue quemada en el mes de mayo de 2021, no menos cierto es que allí se alude a la sede del banco Davivienda de la *carrera 27 #51 – 36* que se encuentra diagonal al parque Gabriel Turbay¹, la cual fue objeto de vandalismo en mayo del presente año y que *no* corresponde a la del presente asunto.

Desde esta arista sin hesitación alguna lo que se concluye en el estado actual de las diligencias es que la sede del banco Davivienda de la *carrera 27 # 20 – 80* de Bucaramanga fue *cerrada* por orden de la misma entidad financiera desde el mes de junio de 2019, sin que al día de hoy se preste servicio alguno en esa dirección, luego, ninguna afectación existía o se produjo para cuando se promovió esta acción, situación que persiste al día de hoy por el cierre definitivo de aquella oficina, sin que tampoco sea posible afirmar que subsista vulneración alguna a los derechos e intereses colectivos esgrimidos por el accionante, precisamente porque ya no existe la referida sede bancaria, lo que implica la configuración de un hecho superado por carencia actual de objeto y desde *antes* de instaurarse esta acción.

Debe acotarse que la consecuencia jurídica antes advertida ha sido aceptada plenamente por la jurisprudencia en las acciones populares: “... El Consejo de Estado ha adoptado idéntico criterio para evaluar si el fenómeno de carencia actual de objeto se ha presentado o no en el curso de una acción popular. En reciente sentencia², la Sección Primera de esta Corporación reiteró la jurisprudencia sentada desde 2003³, según la cual este tiene lugar ante las siguientes dos circunstancias: i) la primera de ellas, cuandoquiera que se ha superado la afectación de los derechos e intereses colectivos y no es procedente ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, por no ser ya necesario; o ii) cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir a la restitución. Cuando tales supuestos se presentan, la orden judicial sería inocua, por lo cual deben denegarse las pretensiones.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, mientras permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la interposición de la demanda, no se configura el fenómeno de la carencia de objeto⁴.”⁵

¹ https://caracol.com.co/emisora/2021/05/03/bucaramanga/1619998670_603267.html

² Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de 2018, expediente 25000-23-41-000-2013-00817- 01(AP), M.P. María Elizabeth García González.

³ Consejo de Estado, sentencia de 27 de marzo de 2003, M.P. Darío Quiñones Pinilla.

⁴ Corte Constitucional, sentencia T-366 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En aquella oportunidad, la Sala de Revisión de Tutelas determinó que en el caso bajo estudio no se había configurado la carencia actual de objeto, por cuanto el Seguro Social, al momento del fallo, sólo había procedido a expedir una orden escrita para la práctica del examen requerido por la accionante, pero la misma seguía a la espera, de manera que la vulneración de su derecho a la salud no había cesado.

⁵ La cita corresponde a la sentencia de unificación 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU del 4 de septiembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Consecuencialmente con lo anterior, se dispondrá terminar el presente asunto por haberse acreditado la carencia de objeto por hecho superado, sin que haya lugar a condena en costas por disposición del artículo 38 de la ley 472.

En mérito de lo expuesto, el suscrito *juez*

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la ausencia actual de objeto por hecho superado, en consecuencia, negar las pretensiones y terminar el presente asunto.

SEGUNDO: Sin condena en costas y en firme el presente auto, archívense las diligencias.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

**Edgardo Camacho Alvarez
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 006
Bucaramanga - Santander**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff77dbfb5ccb2f91e0ed8e82b15bd500a86a655348f393bcddc35f611f4833c3**
Documento generado en 20/10/2021 10:38:46 a. m.

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**